

partido socialista. Pero ya no había nada que hacer. A las once y media de la mañana, los insurrectos se rindieron en las propias calles adyacentes a La Moneda, mientras tres tanques al mando del teniente coronel Souper escapaban hacia la sede del regimiento Blindados Número 2, para rendirse ante el general Óscar Bonilla.

Pablo Rodríguez Grez, Benjamín Matte, y otros dirigentes de Patria y Libertad se refugiaron en la Embajada del Ecuador.

A las ocho de la noche de ese mismo viernes, frente al Palacio de La Moneda, el presidente Allende convocó al pueblo para dar «un informe sobre los hechos». Los obreros reunidos, unos veinte mil, gritaban consignas como «armas para el pueblo», «crear poder popular», «a cerrar el Congreso», «fuera de Chile los yanquis, ahora».

Allende hizo un discurso que finalizó con este párrafo: «Mañana, de nuevo las usinas a levantar su humo para saludar a la patria libre; de nuevo al trabajo a recuperar las horas que significó el paro del jueves; mañana cada uno a trabajar más, a producir más, a sacrificarse más por Chile y por el pueblo... Compañeros trabajadores: tenemos que organizarnos. Crear y crear el Poder Popular, pero no antagónico ni independiente del Gobierno, que es la fuerza fundamental y la palanca que tienen los trabajadores para avanzar en el proceso revolucionario».

Grupos de trabajadores, esa noche, se fueron caminando hacia sus casas gritando eufóricos: «¡Soldado amigo, el pueblo está contigo!»

Larga reunión

A la mañana siguiente del 29 de junio, se reunieron casi todos los generales de la guarnición de Santiago, agrupados bajo el liderato de Herman Brady, Mario Sepúlveda, Guillermo Pickering, Sergio Arellano Stark, Javier Palacios y Óscar Bonilla. Se leyó un informe del SIM que decía que «entre las nueve y las once de la mañana», en los cordones industriales de Los Cerrillos y Vicuña Mackenna, se había reunido un contingente de más o menos diez mil obreros, en preparación para avanzar al centro de Santiago a combatir con las tropas blindadas amotinadas». Se estableció que el «amotinamiento» había sido «causado por la mala influencia de personas civiles sobre nuestros mandos», y que «esta situación da una mala

imagen de la cohesión del Ejército». Se acordó instruir a todos los mandos de unidades en el país «suspender todo tipo de contacto con la organización Patria y Libertad» y «mantener informado al Estado Mayor, cotidianamente, de lo que ocurra en las áreas de jurisdicción respectiva». Se dio un instructivo general a todo el aparato central del Ejército de «constante alerta», de «aumentar el ritmo de los allanamientos de fábricas y sedes de partidos de la Unidad Popular y de la Central Única de Trabajadores, para limpiar la población civil insurreccional de elementos bélicos». Al mismo tiempo, se planteó la necesidad de comenzar «una educación rápida y sistemática de la tropa y suboficiales, con charlas y pequeñas reuniones lideradas por oficiales de alta graduación en las que se señale terminantemente que la Patria está en peligro, que los marxistas preparan una invasión del país con ayuda peruana y que está llegando la hora de dar la vida por la nacionalidad 'chilena».

(En varios regimientos de Santiago, desde julio en adelante, diversas compañías eran despertadas en la madrugada, se las llevaba al salón de proyección de cine, se les hacía ver películas sobre la lucha de la selva en Vietnam, concluyendo con una pequeña charla sobre «el peligro comunista mundial contra nuestras mujeres, hijos y padres», y se lograba, así, mantener constantemente con los nervios en tensión a parte de la tropa.)

La reunión de la mayoría de los generales de la guarnición de Santiago en la mañana del sábado 30 de junio, fue sólo el primer paso de una decisión tomada apresuradamente por los altos mandos en el círculo más íntimo de la conspiración. Esa misma tarde, los generales Oscar Bonilla y Sergio Arellano Stark fueron designados por acuerdo de Herman Brady Roche, Mario Sepúlveda Squella, Javier Palacios, Orlando Urbina Herrera y Guillermo Pickering para conversar con el general Augusto Pinochet, ponerlo en antecedentes de lo que se tramaba y pedirle que se sumara a la conspiración como «el líder del Ejército».

Las reuniones con Pinochet duraron toda la tarde del sábado 30 de junio, parte del domingo primero de julio y la mañana del lunes 2. De acuerdo con informaciones filtradas posteriormente, en esos tres días, al parecer, se fijaron los detalles ideológicos más importantes del golpe militar en gestación, incluyendo la necesidad de sacar del cuadro de la socie-

dad chilena a todos los partidos políticos, para «poner en práctica la patriótica tarea de limpiar el cerebro de los chilenos, infiltrados de la ideología marxista».¹¹

La decisión de Pinochet de sumarse a la conspiración, aceptando el ofrecimiento de ser «el líder de la operación», fue comunicada con alborozo al general Gustavo Leigh Guzmán y al vicealmirante José Toribio Merino. El primer fin de semana de ese mismo mes, la misión norteamericana en el Ministerio de Defensa chileno también fue informada de que el círculo conspirativo se había cerrado al más alto nivel. En la segunda semana de julio, el general Oscar Bonilla fue encargado de conversar con el general de Carabineros César Mendoza Durán para sumarlo a la conspiración. Mendoza Durán aceptó sólo después que se le aseguró que formaría parte de la posible Junta Militar de insurrectos, desplazando a su superior en Carabineros, José María Sepúlveda Galindo.

Así, la primera mitad de julio de 1973, fue una época de júbilo en el Pentágono norteamericano al comprobar que «sus generales» en el Ejército chileno estaban articulando un esquema golpista de enorme magnitud.

Los peones

En las conversaciones del general Augusto Pinochet con los generales en contacto directo con el Pentágono, se acordó presionar a los dirigentes políticos Eduardo Frei y Onofre Jarpa y a los jueces de la Corte Suprema para acelerar una campaña intensa de desprestigio «constitucional» del presidente Allende, y de llegar a una situación de «opinión pública» en que «no hubiera dudas para el común de los chilenos, que los militares chilenos tenían que derrocar a Allende para *volver a la legalidad*».

La maquinaria militar para poner en movimiento a los políticos funcionó de manera increíblemente eficaz. Los deseos de Eduardo Frei y de Onofre Jarpa de provocar un golpe militar para después quedar, uno de ellos, como nuevo presidente de Chile, fueron una tierra sumamente abonada en donde germinó la semilla de los generales que querían «salvar» a Chile por cuenta del Pentágono.

En la misma primera semana de julio, y al parecer por idea del general Augusto Pinochet, muy preocupado por los

resultados electorales imprevistos de las elecciones de marzo de 1973, se acordó pedir «a los contactos civiles» una investigación «que demuestre» que en marzo de 1973 hubo «un gigantesco fraude». Con eso, esperaban los generales, se pondría en duda todavía de manera mucho más fuerte, la «legitimidad» del Gobierno de Allende. Esta tarea recayó en el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, Jaime del Valle, simpatizante del grupo fascista Patria y Libertad.¹²

En poco menos de dos semanas, estuvo «listo» el «estudio científico» de Jaime del Valle y un equipo de ingenieros dirigidos por Santiago Morán, ligado a la oligarquía metalúrgica chilena. El encargo de los generales había sido cumplido. El «estudio» decía (basándose en 29 casos de fallas de inscripción electoral, en un total de más de tres millones de votantes) que «el Gobierno había cometido fraude en marzo de 1973», «falsificando» por lo menos 400 mil votos. Pero, lo importante, era que el «documento» terminaba así:

«Podemos sostener, entonces, que nuestra democracia está hoy quebrada. Nuestro régimen electoral ha permitido un fraude gigantesco y no da garantías de que en futuras elecciones no se vuelva a repetir... Es evidente que en una coyuntura de esta naturaleza, el pueblo chileno se enfrenta con una tarea de gran envergadura que ya no puede eludir. *Esta es la de reconstruir la democracia creando la nueva institucionalidad que la garantice eficazmente.*»

¡Era la idea que los generales querían ver escrita en ese informe! La idea, metida en la cabeza de miles de chilenos a través de la repetición de «documentos» como éste en diarios, revistas, radios y canales de televisión: había que crear «una nueva institucionalidad». Tarea, por supuesto, reservada a los militares.

El 8 de julio, el presidente del Senado, Eduardo Frei, hizo pública una declaración que la noche anterior había sido revisada por los generales Oscar Bonilla y Sergio Arellano Stark. La declaración la firmaba también el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, del mismo partido que Frei, y empresario ligado al monopolio de la locomoción colectiva particular de Santiago. El documento decía: «Es un hecho que Chile atraviesa por una de las más graves crisis en el orden político, económico, social y moral que ha conocido en su historia». Más tarde agregaba detalles parciales de la situación po-

lítica y señalaba «a esto se agrega un proceso organizado de odio y violencia que divide al país». (Por supuesto, sin mencionar la campaña de prensa de la derecha chilena, que calificaba cotidianamente a Allende de «borracho» y «maricón», que acusaba al general Pratts de «vendido por unos dólares más», que pedía a los chilenos que se sumaran a la teoría de que «el mejor marxista es el marxista muerto»; y tampoco no mencionaba el sabotaje a la economía chilena de parte de los organismos financieros de los Estados Unidos, del propio Frei, de la oligarquía chilena; ni la ola de sabotajes dinamiteros, a balazos y a golpes de las organizaciones fascistas, que habían elevado la marca en junio a 115 atentados. Más tarde, en junio, llegarían a 128 y en agosto a 300 mensuales.)

Y en un ejemplo realmente brillante de cinismo, la declaración Frei-Pareto, encargada por Bonilla-Arellano, afirmaba: «Los sectores democráticos que representamos no están armados. Ellos han confiado en que la seguridad interna de Chile está en manos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, conforme a lo dispuesto en la Carta Fundamental y a una tradición quebrantada. Esta situación es aún más incomprensible si se considera que el Gobierno asegura contar con la lealtad de esos Institutos y que el país está tranquilo y que él controla la situación.»

Y agregaba que «nos parece fundamental» que el Gobierno «promulgue en su totalidad la Reforma Constitucional despachada por el Congreso» (se trataba del proyecto Hamilton-Fuentealba, que congelaba el área de propiedad social, reducía su alcance y significaba la destrucción del programa económico de la Unidad Popular).

Un asesinato

La situación se deterioraba por momentos en julio de 1973. Según datos incompletos, entre enero y mayo de 1973, el capital especulativo en manos de la oligarquía nacional había llegado a la enorme cifra de 250 millones de dólares, con lo cual hicieron trizas el ya debilitado equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes de consumo. La restricción en la reinversión de capital, según un pre-estudio de la Sociedad de Fomento Fabril, iba a llegar, en los primeros seis meses de 1973, a porcentajes superiores al 50 %.

También, a esa altura de la situación, al sabotaje económico se sumó una intensa campaña para denunciar la ineptitud demostrada por un número de funcionarios estatales de los partidos de izquierda encargados de administrar «el área de propiedad social», es decir, las empresas estatizadas. Estos funcionarios, conocidos como «interventores», hicieron de la corrupción y la inepticia administrativa un arte, provocando descalabros sectoriales en la producción. Los oligarcas y los imperialistas norteamericanos se aprovecharon de esta realidad parcial para presentar la fábula económica de que «el marxismo» había desmoronado el sistema productivo chileno y que, por lo tanto, «el socialismo» no servía para Chile y había que reemplazarlo por un Estado fascista corporativo.

Las cifras del alza del costo de la vida, que reflejaban la escalada del sabotaje económico reaccionario e imperialista y la incapacidad de algunos sectores de la Unidad Popular para manejar la situación, eran las siguientes:

| | |
|--|---------|
| diciembre de 1970 a diciembre de 1971. | 22,1 % |
| diciembre de 1971 a diciembre de 1972. | 163,4 % |
| enero de 1972 a enero de 1973 | 180,1 % |
| mayo de 1972 a mayo de 1973 | 238,5 % |

Esto significaba que en los primeros cinco meses de 1973, la inflación iba saltando a un promedio mensual de 14,6 %. Después fue peor. Las cifras para julio de 1973, en relación con el mismo mes del año anterior, daban un índice increíble de 323,6 % de inflación anual, el mayor del mundo. Esto quería decir que el promedio mensual había subido a 42,55 %. Según esto, la perspectiva para diciembre de 1973 era de una inflación anual de 500 %.

Con este paisaje de fondo trabajaban los diversos círculos conspiradores de la derecha, pero con contradicciones entre sí.

El punto de vista de la Democracia Cristiana, encabezada por Frei, era distinto al del Partido Nacional, encabezado por el senador Onofre Jarpa. Mientras Frei se debatía en el dilema de utilizar a las Fuerzas Armadas como «disuasivo» contra Allende y, en el caso de llegar a un apoyo cierto para una dictadura militar, maniobrar para que los generales dejaran el poder lo más pronto posible en manos de civiles (en las manos de Frei, por supuesto), la posición del nacional Jarpa era más dura.

Jarpa estimaba que «la única salida posible para mantener la paz social por largo tiempo, es una dictadura militar». Por eso, todos sus esfuerzos eran para empujar a los generales y almirantes por este camino.

Esto provocaba una contradicción y muchas fricciones en la oposición. Sobre todo porque el grupo de Frei tenía conversaciones secretas con Allende, para «llegar a un entendimiento», a un acuerdo con el partido demócratacristiano para congelar las reformas, desviar el inmenso caudal revolucionario que se acumulaba en las filas de los trabajadores en todo el país, y detener la posibilidad de que los militares se sintieran tentados de dar un golpe militar y quedarse «para siempre» en el Gobierno, como ocurrió en Brasil en 1964.

Esto, naturalmente, se reflejaba también en el seno de los altos mandos militares, sobre todo en el Ejército, pilar fundamental de cualquier insurrección militar. A mediados de julio de 1973, ya estaba claro en el seno de los generales del Ejército el acuerdo por «terminar con el proceso Unidad Popular», pero no estaba nada de claro el «cómo». El general Carlos Prats, comandante en jefe, había acuñado la tesis de un gobierno Allende-FF.AA., con la firma de una «paz política» con la Democracia Cristiana y la participación restringida del Partido Comunista de Chile y una parte del socialista, basando su argumentación en que «sólo así impediremos que los trabajadores más extremistas se insurreccionen». A esta tesis se adherían los generales Joaquín Lagos Osorio, Herman Brady Roche, Washington Carrasco Fernández, Héctor Bravo Muñoz, Mario Sepúlveda Squella, Guillermo Pickering y Orlando Urbina Herrera pero con variantes. Mientras Lagos Osorio no hacía objeciones al plan Prats, lo mismo que Orlando Urbina Herrera; los otros cinco generales decían que el Gobierno «transitorio» debía ser solamente con Allende-FF.AA., por «un tiempo corto», para preparar las condiciones para implantar un Gobierno «puramente militar» y poner en ejecución los acuerdos del Pentágono. Los generales Oscar Bonilla, Sergio Arellano Stark y Javier Palacios, en cambio, encabezaban otro grupo, al que se había sumado Augusto Pinochet. En éste se consideraba que la etapa de gobierno Allende-FF.AA era innecesaria.

Con este último grupo estaban los generales César Ruiz Danyau y Gustavo Leigh Guzmán; y los almirantes José Toribio Merino, Horacio Justiniano, Sergio Huidobro, Patricio Carvajal y Pablo Weber.

Solo, pugnando por ser el «líder de la sublevación», estaba el general Manuel Torres de la Cruz, que era el único que decía que «tenemos que operar ahora, de inmediato».

Fue con este marco cuando José Toribio Merino, jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, ordenó a un grupo del Servicio de Inteligencia Naval asesinar al edecán naval del presidente Allende, comandante Arturo Araya Peters. Tarea que se puso en práctica el 26 de julio de 1973, con todos los detalles que ya he relatado anteriormente, en el primer capítulo de este libro.

Este asesinato ordenado por los conspiradores de la Marina, permitió a los servicios de contrainteligencia del partido socialista, detectar un plan del Partido Nacional, en combinación con la Agencia de Inteligencia a través del Comando de Ex Cadetes, para asesinar al presidente Allende. La CIA, después de su error que llevó a Patria y Libertad a intentar la insurrección militar del 29 de junio, estimó que solamente el asesinato de un «pez gordo» podía provocar el caos necesario para que los militares se «movieran». El 27 de julio, viernes, los servicios de contrainteligencia socialistas descubrieron que había movimientos en el Partido Nacional, en relación con una «gran operación» para el 4 de septiembre de 1973, que tenía como objetivo asesinar a Salvador Allende. El plan se descubrió por las infidencias de un parlamentario ligado estrechamente a los grupos fascistas cuando, en la noche del 27 de julio, dijo en una casa particular que «el asesinato de Araya (el edecán naval, ocurrido la noche antes) puede echar a la basura nuestros propósitos». El parlamentario se mostró preocupado por la conmoción nacional que provocaría el asesinato del edecán naval (él no sabía que había sido planificado por el Servicio de Inteligencia Naval), ya que las investigaciones para descubrir a los asesinos podrían levantar la tapa con respecto a la muerte de Allende.

El primero de agosto, Allende denunció esto al general Carlos Prats, y el comandante en jefe del Ejército informó a su cuerpo de generales. Los generales estuvieron de acuerdo en que era «una aventura» el asesinato de Allende, y tomaron medidas para desbaratar el plan a través del SIM. Una vez más, la CIA se embarcaba en cosas no aprobadas por el Pentágono y entorpecía los planes de los generales.

Veinte días más tarde, sin embargo, como vimos en el primer capítulo, los generales en contacto con el Pentágono cambiaron de opinión y decidieron asesinar a Allende, pero simulando un

suicidio, después de haberse hecho cargo de todo el país por medio de una ocupación militar a sangre y fuego.

El asesinato del edecán naval de Allende precipitó las cosas desde el ángulo de los conspiradores civiles, que estimaron que era el momento de desencadenar «un nuevo paro de octubre». El mismo 27 de julio los dueños de camiones de todo Chile comenzaron un paro, alegando que «no se han cumplido los acuerdos por los cuales suspendimos la huelga de octubre de 1972». Tres días más tarde, León Vilarín, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Chile, declara que «este paro termina cuando se acabe el Gobierno de Allende». En Santiago, ese mismo día, Frei conversa con un grupo de amigos, en su casa, y les dice que su indecisión ha terminado, que «creo que sólo las Fuerzas Armadas pueden salvar a Chile».

El martes 31 de julio, el general Carlos Prats se reúne con 250 oficiales de la guarnición de Santiago, para discutir, por iniciativa de los oficiales, «la situación política, la grave crisis económica y las amenazas de sectores obreros contra las Fuerzas Armadas». Los 250 oficiales le piden a Prats que le diga al presidente Allende que «los oficiales del Ejército creen que si no se llega a un acuerdo con la Democracia Cristiana, y si no se incorpora a las Fuerzas Armadas el manejo total del área de propiedad social y se declaran fuera de la ley los corodones industriales, entonces, tendrán que actuar los militares».

Allende contrarresponde sacando a relucir los documentos que tenía sobre la complicidad de altos jefes navales en el asesinato del edecán Araya Peters, y pretendiendo dar un golpe de efecto —como se relata en detalle en el primer capítulo de este libro—, obliga a los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros a aceptar cuatro ministerios en su Gabinete, que comienza a funcionar el 9 de agosto como «la última oportunidad».

El día anterior, 8 de agosto, el Colegio de Abogados de Chile, dirigido por Alejandro Silva Bascuñán, magnate de las finanzas, emite una declaración siguiendo la campaña pedida por los generales conspiradores. En ella dice que se dirige a la opinión pública «en cumplimiento del deber de conciencia de movilizar a los más amplios sectores ciudadanos frente al quebrantamiento del Estado de Derecho y del ordenamiento institucional que ha sido orgullo de los chilenos».

Llama a apoyar todo lo que signifique debilitar al Gobierno constitucional.